

Señor:

JUEZ PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE RIOHACHA

Riohacha – La Guajira

E. S. D.

PROCESO: Especial de Imposición de Servidumbre Legal de Conducción de Energía Eléctrica.
RADICADO: 44-001-31-03-001-2021-00031-00
DEMANDANTE: ELECNORTE S.A.S. ESP.
DEMANDADO: HARRYS ANUAR BADILLO BOLIVAR
ASUNTO: RECURSO DE REPOSICIÓN

YEIMY VIVIANA TUMAY HERNÁNDEZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.118.546.280 de Yopal, portadora de la Tarjeta Profesional de Abogada No. 231202 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderada de la parte demandante **ELECNORTE S.A.S ESP.**, identificada con el NIT. 901.009.473-1, por medio del presente dentro del término legal, interpongo **RECURSO DE REPOSICIÓN (Art. 318 C.G.P)** respecto del numeral 4 del auto admisorio de fecha 8 de abril de 2021 notificado por estado el 9 de abril de 2021, con el fin de que se revoque y en su lugar se autorice la ejecución de obras en el predio, con fundamento en el Decreto 798 de 2020 de fecha 4 de junio expedido por el Ministerio de Minas y Energía conforme a las siguientes:

I. CONSIDERACIONES FÁCTICAS Y JURÍDICAS

1. Mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional y en virtud de esta, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir, controlar la propagación y mitigar sus efectos, la cual fue prorrogada hasta el 31 de mayo de 2021 mediante Resolución No. 222 de fecha 25 de febrero de 2021 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
2. El Ministerio de Minas y Energía mediante el Decreto 798 del 4 de junio de 2020 adoptó una serie de medidas para el sector minero-energético en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, dentro de las cuales establece:

Artículo 7. *Lo dispuesto en este artículo aplicará durante el término de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID - 19.*

Modifíquese el artículo 28 de la Ley 56 de 1981, el cual quedará así:

*"Artículo 28. Con base en los documentos aportados con la demanda, señalados en el numeral 10 del artículo 27 de esta Ley, **el Juez autorizará con el auto admisorio de la demanda, el ingreso al predio y la ejecución de las obras que de acuerdo con el plan***

de obras del proyecto presentado con la demanda, sean necesarias para el goce efectivo de la servidumbre, **sin necesidad de realizar inspección judicial**.

La autorización del juez para el ingreso y ejecución de obras deberá ser exhibida a la parte demandada y/o poseedora del predio, por la empresa encargada del proyecto, en visita al predio para el inicio de obras.

Será obligación de las autoridades policivas competentes del lugar en el que se ubique el predio, garantizar el uso de la autorización por parte del ejecutor del proyecto. Para tal efecto, la empresa encargada del proyecto solicitará al juzgado la expedición de copia auténtica de la providencia que, y un oficio informándoles de la misma a las autoridades de policía con jurisdicción en el lugar en que debe realizarse la entrega, para que garanticen la efectividad de la orden judicial". (Negrilla fuera de texto).

3. De esta forma, el mencionado artículo expuesto en precedencia establece las normas procedimentales en lo referente a la entrega de dicha autorización (**sin necesidad de realizar inspección judicial**) necesaria para el inicio del proyecto el cual tiene como finalidad la imposición de servidumbre legal de conducción de energía eléctrica, para la ejecución de un proyecto de utilidad pública e interés general, la cual fue solicitada en la demanda en el acápite: **"II. PETICIONES ESPECIALES PREVIAS"**, en concordancia con los fundamentos de derecho expuestas en la misma.
4. En razón de lo expuesto, en el marco de la emergencia sanitaria que se encuentra vigente, es aplicable el Decreto 798 de 2020, en concordancia con la calidad de utilidad pública e interés social del Proyecto STR-06-2016 según el art. 16 de la Ley 56 de 1981, como desarrollo del principio de prevalencia del interés general sobre el particular y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado (Art. 2 Carta Política), el artículo 28 de la Ley 56 de 1981 que contiene un término mínimo para determinar el avance de la ejecución del proyecto, entre otros, y es procedente proferir la autorización de ejecución de obras sin necesidad de realizar inspección judicial, de conformidad con el art. 7 del Decreto Legislativo 798 de 04 de junio de 2020 expedido por el MME.
5. El presente recurso se fundamenta en los artículos 16, 28 de la Ley 56 de 1981, Decreto 2580 de 1985, integrado al Decreto 1073 de 2015; Artículos 33, 56, 57, 117 y 119 de la Ley 142 de 1994, el Decreto 806 de 2020 y en el Decreto 798 de 2020, ambos expedidos el 4 de junio de 2020; En la Resolución No. 222 de fecha 25 de febrero de 2021 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social declarada mediante Resolución No. 385 de 2020 y prorrogada a su vez por las Resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020.

Es importante anotar, que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, mediante Sentencia T-761/15 (M.P. Alberto Rojas Ríos), resalta la dimensión social que tiene el acceso a la electricidad de la siguiente manera: *"En las sociedades contemporáneas el acceso a la energía eléctrica es una condición para el disfrute de otros servicios y garantías fundamentales. Varias de las actividades de la vida cotidiana que, hoy se dan por dadas y parecen naturales sólo pueden llevarse a cabo, por el acceso a las redes de energía eléctrica. (...) Uno de los compromisos de la comunidad internacional en la superación de la miseria, está ligado con la garantía del acceso a la energía eléctrica de manera*

conexa con el disfrute de una vivienda adecuada. Superar la indigencia requiere, entonces, dejar atrás la pobreza energética.”.

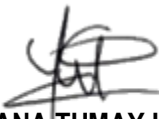
Del mismo tenor, la Corporación mediante Sentencia C-172/14 (M.P. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO), expuso: *“Es sabido que el Constituyente de 1991 reconoció a Colombia como un Estado social y democrático de Derecho, fundado en pilares como el respeto de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general (art. 1 CP). Al mismo tiempo señaló los fines esenciales del Estado y el compromiso de las autoridades de velar por la realización efectiva de los deberes sociales (art. 2). La adopción de este modelo representó una profunda revisión axiológica y simultáneamente se tradujo en una nueva configuración institucional en asuntos particularmente sensibles como el de los servicios públicos, que la doctrina autorizada ha considerado incluso como uno de los asuntos con “tanta o más importancia que muchos de los temas clásicos del derecho constitucional. No en vano la Constitución dedicó un apartado exclusivo a los servicios públicos (capítulo 5, Título XII), justamente teniendo en cuenta su notable incidencia en la calidad de vida y la dignidad de las personas, así como el importante rol que cumplen en el desarrollo económico de la sociedad. Dentro de ese marco constitucional, que es mucho más amplio, lo primero que hay que destacar es la consagración expresa de los servicios públicos como “inherentes a la finalidad social del Estado”, a quien le asignó la tarea de “asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional” (art. 365). Se caracterizan además porque efectivizan otros derechos como la dignidad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad; tienen vocación de universalidad (...).”.*

En virtud de lo expuesto en la demanda y en el presente recurso, de manera atenta elevo a su Señoría las siguientes:

II. SOLICITUDES

1. Que por vía de reposición se revoque el numeral 4 del auto admisorio de fecha 8 de abril de 2021 notificado por estado el 9 de abril de 2021, y en su lugar se autorice la ejecución de obras en el predio objeto de este proceso, de conformidad con el Decreto 798 de 2020 de fecha 4 de junio expedido por el Ministerio de Minas y Energía.
2. Se conserve la vigencia de los demás numerales que hacen parte de la providencia recurrida.

Atentamente,



YEIMY VIVIANA TUMAY HERNÁNDEZ

C.C. No. 1.118.546.280 de Yopal

T.P. No. 231202 del Consejo Superior de la Judicatura